

Gabriel Flores

La agonía de Grecia

(Página Abierta, 239, julio-agosto de 2015)

8 de julio de 2015.

Para el autor de este artículo, Grecia es un problema para la vieja Europa y un galvanizador de las fuerzas que pugnan por una nueva Europa. Cuando ya habíamos cerrado este número, las negociaciones para un nuevo rescate parecen haber cuajado con un acuerdo del que no podemos ya ocuparnos en estas páginas. Septiembre nos espera.

Las negociaciones entre el bloque de poder conservador que manda en Europa y el Gobierno de izquierdas de Syriza encallaron a finales del pasado mes de junio. Tras seis meses de tiras y aflojas y dos semanas finales de máxima tensión, las negociaciones se rompieron. La eurozona y, más aún, Grecia estaban al borde del precipicio. El segundo plan de rescate expiraba a finales de diciembre de 2014 y había sido prorrogado durante seis meses, hasta el 30 de junio de 2015, para propiciar las conversaciones y posibilitar que el diálogo entre las partes pudiera alumbrar una nueva prórroga y, posteriormente, un nuevo plan de rescate.

Tsipras entendió en el tramo final de esas negociaciones que las concesiones que había realizado no habían sido apreciadas por sus interlocutores, que se negaron a realizar mención alguna en el acuerdo a una futura reestructuración de la deuda.

Las negociaciones habían entrado en un callejón sin salida del que nada nuevo ni bueno podían esperar el pueblo griego o su Gobierno. Merkel y compañía, con algún tímido intento de guardar distancias por parte de Hollande o Renzi que se diluyó al instante siguiente de hacer su aparición, entendieron que la situación estaba madura para darle la puntilla y desembarazarse del molesto Gobierno de Syriza.

Existía, va a seguir existiendo, un peligro cierto de exclusión de Grecia del euro, pero los riesgos eran y son de tal calibre que afectan al propio proyecto de unidad europeo, amenazan alianzas y equilibrios de alto valor geoestratégico, condicionan la estabilidad de una región potencialmente tan turbulenta como los Balcanes y generan mucha intranquilidad en la superpotencia estadounidense que, durante todo el proceso, ha pedido a las partes que mantuvieran el diálogo y alcanzaran un acuerdo.

Lo sucedido en esa última fase de la negociación tiene causas y explicaciones políticas. Alemania, país que lidera el bloque conservador que mantiene las riendas de Europa y mangonea el proceso negociador con Grecia, quiere preservar lo esencial de la estrategia de salida de la crisis que impuso en 2010 y sus bases de austeridad y devaluación salarial. Merkel y sus aliados (entre los que se incluye, para su vergüenza, la socialdemocracia europea visible) no están dispuestos a tolerar que un Gobierno díscolo de un país periférico rechace las políticas de austeridad.

Grecia tiene un peso económico cercano a la insignificancia y muestra una fragilidad económica y financiera que reduce al mínimo sus opciones de plantear una estrategia alternativa. Merkel y compañía no van a permitir que ese pequeño y díscolo socio modifique la política europea.

Las reformas de la eurozona, que sigue siendo una obra inacabada cargada de debilidades e incoherencias institucionales, se harán cuando Merkel y sus aliados consideren. En ningún caso antes de que los países del sur de la eurozona pongan en orden sus cuentas públicas y exteriores, acepten las prioridades establecidas y respeten los objetivos marcados. Y mientras tanto van

a seguir presionando al Gobierno de Syriza, en estas y en futuras conversaciones, y a cualquier otro Gobierno que agite las aguas. Aún a riesgo de que la presión se les vaya de las manos, como ha ocurrido en esta ocasión.

El poder de negociación de Grecia no reside en la amenaza que pueda representar para el resto de los socios que suspenda pagos o salga de la eurozona. Como ha demostrado la celebración del referéndum y los efectos del masivo respaldo dado a la posición de Tsipras, el poder de negociación de Grecia se sustenta en dos pilares: primero, el compromiso de Syriza con sus electores y con la mayoría social griega; segundo, su propuesta a favor de otra Europa, solidaria, cooperativa, cohesionada y democrática, que resulte acogedora y útil para todos los Estados miembros y el conjunto de la ciudadanía europea.

Sin embargo, siendo muy importantes, las causas y explicaciones de naturaleza política e institucional no agotan el análisis ni permiten abordar una parte decisiva de los factores y problemas que están en juego. En el ámbito económico se han generado, y se pueden resolver o agudizar, problemas y dificultades que exigen diagnósticos y tratamientos de naturaleza económica.

El árbol de la deuda griega

La victoria del no en el referéndum griego ha tenido la virtud, entre otras muchas, de poner encima de la mesa de negociación la necesidad de una nueva reestructuración de la deuda pública griega. Problemas económicos y políticos de enorme entidad dificultaron el tratamiento abierto de esa cuestión en las pasadas conversaciones y van a seguir dificultándolo en la nueva ronda negociadora que se ha abierto tras el referéndum.

Si la simple mención explícita de la reestructuración de la deuda es ya un problema notable, que se aborde pública y explícitamente la posibilidad o conveniencia de una nueva quita es una pretensión que raya lo imposible. Ni siquiera es probable que puedan incorporarse en el próximo acuerdo fórmulas explícitas de reestructuración, como nuevos aplazamientos en el pago del principal prestado, moratorias y rebajas en el pago de los intereses o vinculación entre la devolución de la deuda y crecimiento económico. Nada que pueda ser interpretado de forma inequívoca como un traspaso de la deuda griega a los contribuyentes alemanes o como un premio explícito que pudiera ofrecer ventajas políticas a Syriza y la izquierda europea contraria a la austeridad.

Pocos dudan hoy de la necesidad de aligerar el fardo de una deuda pública de 321.700 millones de euros (177% del PIB) si se quiere dar una oportunidad de recuperación a la economía griega y, por tanto, hacer mínimamente creíbles sus posibilidades de devolver parte del dinero que se le ha prestado. La enorme cuantía de la deuda pública griega es un problema importante, pero no es el problema.

La reestructuración de la deuda es parte de la solución, pero no es la solución. Conviene que el cienmilmillonario árbol de la deuda griega no impida ver el bosque de una economía devastada que ha perdido gran parte de su sustancia productiva, ha visto seriamente deteriorado y disminuido su crecimiento potencial y no dispone de un modelo de crecimiento ni de los recursos humanos y de capital para reconstruirlo por sus propios medios. Ni fuera de la eurozona ni en esta unión monetaria y esta Europa. Ni con una deuda pública del 120% del PIB a la que se aspira ni, mucho menos, con su actual nivel de 177%.

La economía griega es insolvente y la solución a ese grave problema no pasa por camuflar esa situación (como ya se hizo en el primer rescate de 2010 y se volvió a hacer en el segundo rescate de 2012) con un tercer plan que exija más recortes y austeridad a cambio de un dinero que mantenga la ilusión de que la deuda se puede pagar y que la solución a todos los problemas pasa por equilibrar las cuentas públicas a como dé lugar.

Tampoco pasa por una salida de la eurozona que representaría una gran incógnita para el futuro de la unión monetaria, un importante quebranto para el conjunto de los socios y una catástrofe para Grecia si su salida del euro no fuera de la mano de un acuerdo negociado con sus socios de la eurozona.

Nadie en Europa, tampoco Merkel y compañía, se opone por principio a una quita que elimine parte de la deuda pública griega o a una reestructuración que disminuya la carga financiera o aplase los pagos de su devolución. De hecho ya se produjo una importante eliminación de deuda en 2012 y se aprobaron varias medidas importantes de reestructuración. Bien es verdad que aquella quita sirvió para aminorar las pérdidas de los acreedores privados y se hizo en el momento más adecuado a los intereses de esos acreedores, cuando los bancos concernidos ya se habían desprendido de una parte y provisionado el resto, escalonando en varios ejercicios la contabilización de las futuras pérdidas.

La oposición de los líderes políticos europeos y de su principal guía, Merkel, a eliminar una parte o reestructurar la deuda griega no se sustenta en principios económicos o dosis de maldad intrínseca e indiferencia ética ante el sufrimiento que causan sus decisiones a próximos o extraños. Tampoco, en su subordinación al ciego discurrir de los mercados y a los intereses de los grandes poderes económicos; aunque ninguno de esos factores haya que descartarlos del todo y, probablemente, ejerzan su influencia.

El problema es mucho más prosaico e inmediato, Merkel no está dispuesta a que le marquen la agenda. Y menos aún, una izquierda situada en posiciones de poder institucional y contraria a la estrategia de austeridad que intenta disputar la hegemonía a la derecha conservadora y pretende un reequilibrio de las relaciones de poder en la UE y un nuevo rumbo para Europa. Merkel y compañía no han podido, como pretendían, desplazar a Tsipras del Gobierno y aislar a Syriza, pero no van a renunciar a intentar desgastarlos en los próximos meses.

Gracias al segundo plan de rescate de 2012 y a una quita de la deuda griega en manos de los acreedores privados que supuso borrar 107.000 millones de euros se resolvió la delicada situación patrimonial de los bancos y fondos de pensiones privados europeos que detentaban esa deuda y a los que la declaración de impago por parte de Grecia habría situado en posición de quiebra técnica.

Tras el fracaso de los dos rescates, muchos economistas e instituciones financieras (en primer lugar, el FMI) han reconocido el error del tratamiento de la deuda griega, por haber aportado financiación a una economía insolvente que hubiera necesitado una quita importante desde el principio de la crisis, porque no era capaz de generar recursos para pagar la deuda existente ni, mucho menos, la acumulación de deuda que generarían los nuevos préstamos. De hecho, el FMI y su actual presidenta, Lagarde, siguen siendo partidarios de una quita por parte de las instituciones europeas que detentan ahora la mayor parte de la deuda soberana griega.

Las instituciones europeas rechazan aceptar una nueva quita por, al menos, tres motivos o temores: primero, temen la creación de un precedente que suponga un premio para Grecia y un agravio para los otros países rescatados; segundo, temen la reacción de las opiniones públicas que tendrían que soportar como contribuyentes buena parte de la eliminación de la deuda griega; y tercero, temen el impacto que tendría sobre la solvencia de los Estados miembros que realizaron directa o indirectamente esos préstamos. Temores racionales y comprensibles, más aún en momentos tan delicados como los actuales, si no fuera porque con su negativa absoluta a buscar soluciones ocasionarán pérdidas y riesgos de mayor calado y extensión y un alcance incalculable.

De forma inmediata, lo que está en cuestión es la aprobación parlamentaria en algunos Estados miembros de la eurozona de los compromisos incluidos en la *Declaración de la Cumbre del Euro* de pasado 12 de julio y qué

modalidad nueva de financiación de urgencia va a permitir respirar a la economía griega. La definición de un tercer plan de rescate y las condicionalidades asociadas van a tener que salvar nuevos obstáculos políticos y esperar más tiempo.

Por otro lado, hace falta tiempo para que la ciudadanía alemana se haga cargo de la nueva situación alumbrada por el referéndum griego e incorpore una visión más ajustada de los intereses alemanes en juego y un diagnóstico menos ideológico de los problemas de los países del sur de la eurozona. Dichos problemas no están asociados al calor o el relajo de las costumbres sino a las políticas de austeridad aplicadas, el mal funcionamiento de la eurozona y una mala gestión política que no trata de ninguna forma las debilidades e incoherencias institucionales que caracterizan a esta unión monetaria.

Así como la intensificación y prolongación de la crisis económica y social griega, y la falta de vías de salida, pueden acabar afectando a los apoyos políticos y sociales del Gobierno de Syriza en las próximas semanas, en Alemania crece el hartazgo frente a lo que se entiende como un intento de Grecia de vivir a costa de Alemania y de los otros países de la eurozona [ver recuadro: "La opinión de la ciudadanía alemana"].

El bosque devastado de la economía griega

En la negociación entre Grecia y la Troika, todos los temas a debate y las discrepancias giran en tono a la deuda, pero recuperar la economía griega exige algo más que preocuparse de la deuda.

Grecia necesita con urgencia que sus socios de la eurozona le proporcionen nueva financiación para evitar la paralización de la economía y atender al vencimiento de 3.500 millones que debe pagar al BCE el próximo 20 de julio y otros 3.200 millones el 20 de agosto. Pero los problemas fundamentales de Grecia no surgen del origen o la cuantía de su deuda. Son las estructuras y especializaciones productivas de Grecia las que generan deuda y muestran su insolvencia. A esos factores se suman el despilfarro y la corrupción propios de administraciones públicas laxas, con tan escasa regulación como control ciudadano, que practican el clientelismo y se sustentan en él.

Debe actuarse, pues, sobre el insostenible fardo que supone la deuda, para aligerarlo. Probablemente, aceptando que primero se reduzcan aún más los costes financieros y se aplacen pagos y, posteriormente, anulando parte de la deuda; pero hay que actuar también sobre las estructuras económicas e institucionales que generan el endeudamiento, tanto antes como después de la crisis de 2008 y los rescates, tanto si Grecia permanece en la eurozona como si es expulsada por sus socios.

Si el nuevo acuerdo económico sigue centrado exclusivamente en los recortes y el incremento indiferenciado de la carga fiscal que sufren las personas físicas, como en los anteriores rescates, se producirán una nueva compresión de la demanda interna, que desanimará la inversión de las empresas domésticas y extranjeras, y un nuevo deterioro de la solvencia presupuestaria que acabará impactando sobre el crecimiento potencial y alimentando una nueva espiral recesiva. De poco serviría en ese contexto una quita, porque la lógica económica volvería a engordar la deuda pública. Haría falta abrir la puerta a una negociación que, en lugar de darle una patada a la bola de los problemas para ganar tiempo y que parezca que la economía se mueve, apueste por una salida inteligente y duradera.

Hay que reforzar, en el corto plazo, los sectores en los que Grecia tiene ventajas comparativas (el turismo, el sector agroalimentario y las energías renovables podrían servir de ejemplo), y para ello es imprescindible el apoyo de fondos de inversión productiva europeos. Y hay que dotar a la economía griega de un músculo industrial mínimo, ya que el valor añadido bruto generado por el sector manufacturero es el segundo más bajo de la eurozona, después de Chipre.

El impulso de la reindustrialización y la productividad global de los factores productivos es tan necesario para equilibrar las cuentas públicas y exteriores como un manejo razonable y muy medido –para no ahogar el crecimiento– del alza de los tributos sobre aquellos sectores sociales y agentes económicos que pueden encajarla y la reducción de los gastos públicos de carácter superfluo o prescindible, no de la inversión pública ni de aquellos gastos que son necesarios para el crecimiento (educación y salud) o afectan a los bienes públicos y la protección social.

En el marco de la estrategia de austeridad, conseguir la solvencia externa exige aumentar las exportaciones y, tanto o más importante, impedir un aumento paralelo de las importaciones. Los recortes en los costes laborales y el presupuesto público pretenden, sin conseguirlos, ambos objetivos: incrementar la competitividad sustentada en la reducción de los precios de exportación y conseguir una compresión de la demanda interna que limite las importaciones y genere un superávit por cuenta corriente que, al menos, mantenga la deuda externa neta controlada, sin que se incremente su peso porcentual respecto al PIB.

Por otro lado, conseguir la solvencia presupuestaria a corto plazo exige un recorte brutal e injusto del gasto público o un incremento tan brutal e injusto de los ingresos tributarios que no afecten a la rentabilidad de las empresas y, por tanto, permitan impulsar la inversión interna y atraer al ahorro y la inversión directa del resto del mundo.

Esas políticas de austeridad han cosechado un rotundo fracaso en Grecia: han aumentado sus desequilibrios macroeconómicos, han devastado su tejido productivo, empresarial y político, han empobrecido a la mayoría social, han tensado el conflicto sociopolítico y, a la postre, han consolidado y profundizado la situación de insolvencia de la economía griega.

El proyecto de unidad europea

El problema y los impactos de las medidas de austeridad impuestas a Grecia también reflejan los graves problemas que afrontan el proyecto de unidad europea y las bases económicas e institucionales que lo sustentan. ¿Cómo alcanzar niveles de cohesión que son imprescindibles para que la unión monetaria funcione adecuadamente, difunda sus potenciales ventajas y resulte beneficiosa para todos los socios de la eurozona? ¿Cómo justificar una unión monetaria y un proyecto de unidad europea que no promueven la convergencia entre sus socios y contribuyen a incrementar las fracturas productivas, económicas y sociales entre sus componentes?

Tras el nacimiento del euro, la reducción de las diferencias en los niveles de renta por habitante de los Estados miembros se produjo a costa del sobreendeudamiento exterior de los países periféricos de menor desarrollo (Grecia, Irlanda, Portugal y España). El estallido de la crisis financiera global demostró que tal modelo de crecimiento y convergencia era inviable. Los mercados financieros se cerraron y los sistemas bancarios de los países excedentarios del norte de la eurozona interrumpieron de forma radical el flujo de préstamos a los agentes económicos públicos y privados de los países periféricos (que habían alcanzado niveles de deuda externa neta próximos al 100% del PIB), la actividad económica vinculada a la burbuja financiera se desplomó y el consiguiente aumento de los tipos de interés y el desempleo se hicieron insoportables.

El estallido de la burbuja financiera mostró que la convergencia económica de los países de baja renta del Sur respecto a los países del Norte no puede sostenerse de forma duradera en flujos de financiación que generan una deuda externa neta insostenible. Una unión monetaria como la eurozona, que no cuenta con una mínima unidad presupuestaria y fiscal, no puede tener Estados miembros sobreendeudados.

Solo hay dos herramientas para mantener la convergencia económica y un mínimo nivel de cohesión económica, social y territorial. Primera, favorecer la productividad global de los factores de los países de menor renta por habitante para que crezcan de forma saludable y sostenible y se aproximen a la renta por habitante de los socios de mayor desarrollo del norte de la eurozona. Segunda, garantizar suficientes transferencias de renta (en un marco federal que suponga un desarrollo institucional y avances sustanciales en la unidad fiscal y presupuestaria) que permitan reducir las diferencias.

Ambas opciones son compatibles o complementarias y se basan en la cooperación y la solidaridad entre los Estados miembros; todo lo contrario de la insolidaridad y la competencia entre los socios que alientan las políticas de austeridad. Ninguna de las dos opciones está sobre la mesa de debate de las instituciones europeas ni, en consecuencia, se van a ofrecer a corto o medio plazo al Gobierno de Syriza. De este modo, las negociaciones entre Grecia y sus acreedores permiten, en el mejor de los casos, salir del paso, lo cual no deja de ser muy importante en la crítica situación actual, pero mantienen a la economía griega en una situación próxima a la congelación o el bloqueo. Pueden evitar lo peor, en función de los intereses y los objetivos que el poder hegemónico conservador considere en cada momento, pero no permiten avanzar en la búsqueda de soluciones duraderas como propone con sobradas razones y una perseverancia digna de mejores resultados el Gobierno de Tsipras.

Por ello, el diálogo emprendido hace cinco meses, tras el triunfo electoral de Syriza, ha tenido tan poco recorrido. Y algo parecido puede ocurrir con la nueva ronda negociadora que pugna por abrirse paso. Puede conseguir que se salga del paso una vez más y prolongar la situación sin agravar los problemas. Para las instituciones europeas, las negociaciones con Grecia van a seguir siendo un método de desgaste y división de Syriza y un aviso para la ciudadanía griega, portuguesa y, sobre todo, española, de lo que van a tolerar o no.

Por su parte, el Gobierno griego pretende no perder el apoyo de la mayoría social griega, lograr una amplia unidad de acción con el resto de fuerzas democráticas griegas, resistir en sus posiciones fundamentales, aceptando que las concesiones forman parte indisoluble de la resistencia a las políticas de austeridad, y seguir alimentando la necesidad de negociar soluciones duraderas a la espera de que otras fuerzas alternativas alcancen posiciones de poder institucional y ayuden a disputar la hegemonía al bloque conservador en Europa.

Tsipras puede, como ha demostrado de sobra en las últimas semanas, hacer muchas concesiones e, incluso, renunciar a que el acuerdo recoja propuestas razonables que no entran en conflicto abierto con la estrategia de austeridad. Su pretensión y su esfuerzo merecen respeto y solidaridad. Y no estaría mal echarle una mano en las próximas elecciones generales, para echar a Rajoy y que Tsipras no se encuentre tan solo en el escenario de las instituciones de la eurozona y la UE y en la tarea de impulsar la nueva Europa.

La opinión de la ciudadanía alemana

Entre la ciudadanía alemana crece el rechazo a que la UE haga “más concesiones a Grecia”. Y ese rechazo ya es abrumador. Según el *Politbarometer* publicado el pasado 12 de junio por la cadena de la televisión pública alemana ZDF, un 70% de los encuestados se oponía a hacer más concesiones a Grecia mientras tan solo un 24% se mostraba favorable. En el último *Polibarometer* publicado el pasado 3 de julio (justo antes del referéndum), el rechazo a realizar más concesiones había crecido hasta el 85% frente a un 10% que consideraba conveniente hacerlas.

La adscripción ideológica de los encuestados parece pesar menos que el hartazgo nacional alemán ante una Grecia a la que consideran despilfarradora y holgazana. A su entender, los griegos viven a costa del sufrido contribuyente y productivo trabajador alemán y no están dispuestos a que las cosas sigan así. Y

esa visión de Grecia y de sus ciudadanos era apoyada por los votantes de todo el espectro político alemán.

Ni siquiera entre los votantes de Die Linke (La Izquierda), que comparte grupo en el Parlamento Europeo con Syriza, ganan los partidarios de hacer nuevas concesiones a Grecia: tan solo el 28% de sus votantes se mostraba a favor de hacerlas; les seguían los votantes del socialdemócrata SPD (18%), Los Verdes (15%), CDU/CSU (4%) y AfD (3%). Malos políticos con pésimos argumentos y estrechas miras nacionales causan estragos en el proyecto de unidad europea. En tal situación, ni siquiera Merkel puede actuar con total libertad.